

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE**  
**BOGOTÁ D.C.**

**ACCIÓN DE TUTELA**  
**RADICADO: 11001-41-05-008-2023-00413-00**  
**ACCIONANTE: REYLAURO S.A.S.**  
**ACCIONADA: CONCESIÓN RUNT S.A.**

**SENTENCIA**

En Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), procede este Despacho Judicial a resolver la acción de tutela impetrada por **REYLAURO S.A.S.**, a través de su representante legal, quien solicita el amparo del derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por la **CONCESIÓN RUNT S.A.**

**RESEÑA FÁCTICA**

Manifiesta la accionante, que el día 29 de enero de 2023 radicó un derecho de petición ante el RUNT, respecto del comparendo No. 25126001000035830627.

Que a la fecha de presentación de la acción de tutela no ha recibido respuesta.

Conforme a lo anterior, solicita el amparo del derecho fundamental de petición y se ordene a la accionada responder la petición.

**CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA**

**CONCESIÓN RUNT S.A.:**

La accionada allegó contestación el día 16 de mayo de 2023, en la que, frente al caso concreto, manifiesta que es cierto que la parte actora envió una petición el 29 de enero de 2023, a la cual se le asignó el radicado R1.5\_202302876.

Que la petición versa sobre información de direcciones, más no señala nada relacionado con un comparendo como se manifiesta en el escrito de tutela.

Que el 31 de enero de 2023 dio respuesta oportuna y suficiente a la petición de la accionante, y que ésta fue enviada al correo electrónico de notificación autorizado.

Que en la respuesta indicó que las direcciones registradas en el RUNT pueden ser consultadas a través de la página web: [www.runt.com.co](http://www.runt.com.co) e incluso actualizadas en dicho portal.

Por lo anterior, pide se niegue la acción de tutela por cuanto no ha vulnerado derechos fundamentales dado que dio respuesta oportuna y suficiente al accionante.

### CONSIDERACIONES

#### PROBLEMA JURÍDICO:

En concordancia con los hechos que fundamentan la acción de tutela, corresponde al Despacho responder el siguiente problema jurídico: ¿La **CONCESIÓN RUNT S.A.** vulneró el derecho fundamental de petición de la sociedad **REYLAURO S.A.S.**, al no haberle dado respuesta a su petición del 29 de enero de 2023?

### MARCO NORMATIVO

Conforme el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un instrumento judicial de carácter constitucional, subsidiario, residual y autónomo, dirigido a facilitar y permitir el control de los actos u omisiones de todas las autoridades públicas y excepcionalmente de los particulares cuando éstos vulneren derechos fundamentales.

Esta acción constitucional puede ser interpuesta por cualquier persona a fin de obtener la pronta y efectiva defensa de los derechos fundamentales cuando ello resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable, o cuando no exista otro medio de defensa judicial.

#### DERECHO DE PETICIÓN

El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. En desarrollo del Texto Superior, fue expedida la Ley 1755 de 2015 “*Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del*

*Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”, una norma de carácter estatutario, que establece la regulación integral de ese derecho fundamental.

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional se ha referido al derecho de petición, precisando que su contenido esencial comprende: (i) la posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados y excluyendo fórmulas evasivas o elusivas<sup>1</sup>.

Asimismo, la Corte Constitucional<sup>2</sup> ha señalado que el ejercicio del derecho de petición en Colombia está regido por las siguientes reglas y elementos de aplicación:

*“1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.*

*2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.*

*3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser **oportuna**, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe **resolver de fondo** el asunto solicitado. Además de ello, debe ser **clara, precisa y congruente** con lo solicitado; y (iii) debe ser **puesta en conocimiento** del peticionario.*

*4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita.*

*5) El derecho de petición fue inicialmente dispuesto para las actuaciones ante las autoridades públicas, pero la Constitución de 1991 lo extendió a las organizaciones privadas y en general, a los particulares.*

*6) Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 el término para resolver las peticiones formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que señalaba un término de quince (15) días para resolver, y en los casos en que no pudiese darse la respuesta en ese lapso, entonces la autoridad pública debía explicar los motivos de la imposibilidad, señalando además el término en el que sería dada la contestación.*

*7) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. En sentido concurrente, el silencio administrativo es prueba de la violación del derecho de petición.*

*8) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea el derecho de petición no la exonera del deber de responder.*

<sup>1</sup> Sentencia T-251 de 2008. Citada en las Sentencias T-487 de 2017 y T-077 de 2018.

<sup>2</sup> Sentencias T-296 de 1997, T-150 de 1998, SU-166 de 1999, T- 219 de 2001, T-249 de 2001 T-1009 de 2001, T-1160 A de 2001, T-1089 de 2001, SU-975 de 2003, T-455 de 2014.

*9) La presentación de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de notificar la respuesta al interesado”.*

Así entonces, la efectividad y el respeto por el derecho de petición, se encuentran subordinados a que la autoridad o el particular, según se trate, emitan una respuesta de fondo, clara, congruente, oportuna y con una notificación eficaz.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho de petición supone un resultado que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución de la petición. Sin embargo, se debe aclarar, que el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa<sup>3</sup>.

En síntesis, la garantía real al derecho de petición radica en cabeza de la administración o del particular una responsabilidad especial, sujeta a cada uno de los elementos que informan su núcleo esencial. La obligación no cesa con la simple resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que esté dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real, una contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información.

Es importante señalar, que el artículo 5° del Decreto 491 de 2020, amplió los términos para resolver los derechos de petición, pasando de 15 a 30 días hábiles mientras dure el Estado de Emergencia Sanitaria.

La Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de esta norma en la Sentencia C-242 de 2020, declarándola exequible de forma condicionada, bajo el entendido de que la ampliación de términos para solucionar las peticiones no solo es aplicable a las autoridades públicas, sino que también se hace extensible a los particulares.

Valga señalar, que si bien la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022 derogó el artículo 5° del Decreto 491 de 2020, en criterio del Despacho esta última norma debe seguirse aplicando a las peticiones que se hayan radicado durante su vigencia; es decir, que los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 se reestablecerán, pero únicamente para las peticiones radicadas a partir del 18 de mayo de 2022.

---

<sup>3</sup> Sentencia T-146 de 2012.

## CASO CONCRETO

Partiendo de las consideraciones expuestas y de la documental allegada, observa el Despacho que la sociedad **REYLAURO S.A.S.**, a través de su representante legal, envió a la **CONCESIÓN RUNT S.A.** una petición en la que solicitó lo siguiente<sup>4</sup>:

***“PRIMERO:** Solicito se me entregue el certificado de datos registrados en el RUNT con el histórico de direcciones asociado a la empresa **REYLAURO SAS** identificada con el NIT 900210423-8. Esta solicitud versa sobre todos los vehículos que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT a nombre de la empresa acá referenciada.*

***SEGUNDO:** Del anterior historial y por cada registro, solicito se me informe a través de qué medio o trámite se efectuó tal actualización de las direcciones.”*

La petición fue enviada el 29 de enero de 2023 a las direcciones electrónicas: [solicitudinformacion@runt.com.co](mailto:solicitudinformacion@runt.com.co), [contactenos@runt.com.co](mailto:contactenos@runt.com.co) y [peticiones@runt.com.co](mailto:peticiones@runt.com.co), bajo el asunto: “Derecho de petición (LD-173646) de REYLAURO SAS - comparendo No. 25126001000035830627”<sup>5</sup>.

La **CONCESIÓN RUNT S.A.** al contestar la acción de tutela, aceptó haber recibido el derecho de petición, al cual le asignó el radicado R1.5\_202302876 SI, y a la vez aseguró que el 31 de enero de 2023 dio respuesta, notificando la misma al correo electrónico autorizado en la petición. Aportó una copia de la respuesta, la cual se lee en los siguientes términos<sup>6</sup>:

*“En atención a su solicitud, recibida por la concesión RUNT S.A el 30 de enero de 2023, mediante la cual su despacho, solicita (...):*

*PRIMERO: Solicito se me entregue el certificado de datos registrados en el RUNT con el histórico de direcciones asociado a la empresa REYLAURO SAS identificada con el NIT 900210423-8. Esta solicitud versa sobre todos los vehículos que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT a nombre de la empresa acá referenciada.*

*SEGUNDO: Del anterior historial y por cada registro, solicito se me informe a través de qué medio o trámite se efectuó tal actualización de las direcciones.*

*(...) debemos dar alcance a la respuesta brindada con el Radicado RUNT R202129509 y señalarle lo siguiente:*

*En atención a las continuas solicitudes allegadas por varios ciudadanos a la **Concesión RUNT S.A.** a través de su empresa sobre el histórico de direcciones de domicilio registradas en la base de datos RUNT, debemos reiterarle que, para facilidad del ciudadano, desde el día **18 de octubre del año 2017**, a través de la aplicación de la página web del RUNT: <http://www.runt.com.co/ciudadano/actualizacion-de-datos-en-runt> todo titular de la información puede llevar a cabo directamente la solicitud de*

<sup>4</sup> Páginas 6 a 8 del archivo pdf 01AccionTutela

<sup>5</sup> Página 5 ibidem

<sup>6</sup> Páginas 20 y 21 del archivo pdf 07ContestacionAccionada

*consulta, actualización, modificación o corrección de los datos personales relacionados con direcciones, teléfono o correo electrónico.*

*Esta aplicación fue diseñada por la Concesión, con el aval del Ministerio de Transporte y en cumplimiento del **artículo 15 de la Ley 1755 de 2015** “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición” en la cual se señala que para dar respuesta clara y de fondo a los derechos de petición se pueden poner a disposición de los ciudadanos instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento.*

*Mediante esta misma aplicación todos los titulares de la información, después de validar su identificación, también pueden consultarla en línea y de forma gratuita, encontrándose un espacio dispuesto para la información de direcciones anteriores. Esta aplicación le mostrará todas las direcciones que fueron registradas ante los organismos de tránsito, y desde el **18 de octubre de 2017**, también si fueron modificadas desde la aplicación dispuesta por el RUNT.*

*Debemos señalarle que, la información señalada en la aplicación le servirá a todo ciudadano de certificación ante cualquier autoridad, siendo esta la manera de obtener la información o el certificado solicitado, pues el titular de la información debe utilizar las herramientas estandarizadas que la concesión ha dispuesto a través de su página web para responder de forma segura, sistemática y de fondo, las solicitudes elevadas por los ciudadanos, todo en cumplimiento de la **Ley 1755 de 2015**.*

*Ahora, si el titular de la información no puede o no quiere obtener la mencionada información o captura de pantalla a través de nuestra página web, usted debe saber que, mediante el **comunicado 118 del 13 de septiembre de 2017** la Concesión RUNT S.A. comunicó a los Organismos de Tránsito del país que dispuso la nueva funcionalidad “**Personas Naturales Direcciones**”, la cual les permite realizar sin restricciones las consultas de direcciones de los ciudadanos registrados en el sistema RUNT, salvaguardando los lineamientos de lo señalando en la **Ley 1843 de 2017**, por lo que usted podrá solicitarla ante cualquier organismo de tránsito del país.*

*Habiéndole informado entonces el mecanismo estandarizado que ha dispuesto la Concesión RUNT para que todo ciudadano después de validar su identificación pueda realizar la consulta de forma gratuita del histórico de sus direcciones de domicilio registrado por los Organismos de Tránsito en el Sistema RUNT, damos copia de esta respuesta a cada una de las direcciones que han sido creadas con el dominio de su empresa (**JUZTO.CO**), para que cada titular de la información personal pueda realizar este proceso sin temor a que sus datos sean revelados por personas que no han autorizadas, todo respetando los principios de seguridad, finalidad, proporcionalidad y autorización de la Ley 1581 de 2012.”*

Con base en lo anterior, el Despacho procede a analizar si la respuesta brindada por la entidad accionada cumple los requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional para considerar satisfecho el derecho de petición.

En primer lugar, respecto de la **notificación** de la respuesta, se tiene que ésta fue remitida bajo el asunto: “Respuesta Radicado RUNT R1.5\_202302876” el día 31 de enero de 2023 desde el correo electrónico: [centroinformacion@runt.com.co](mailto:centroinformacion@runt.com.co) hacia el correo electrónico: [entidades+LD-173646@juzto.co](mailto:entidades+LD-173646@juzto.co), que coincide con el autorizado por la parte actora en el derecho de petición<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Página 20 ibidem

En segundo lugar, respecto de la **oportunidad** de la respuesta, se tiene que, contrario a lo manifestado por el accionante, ésta fue emitida dentro del término legal previsto en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, esto es, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la radicación de la petición.

Ahora bien, respecto del tercer requisito relativo a **resolver de fondo** y de manera completa lo peticionado, se evidencia que la respuesta otorgada por la **CONCESIÓN RUNT S.A.** sí lo cumple, toda vez que informó a la accionante que, desde el 18 de octubre de 2017, a través de la página web: <http://www.runt.com.co/ciudadano/actualizacion-de-datos-en-runt> los titulares de la información pueden directamente: consultar, actualizar, modificar o corregir los datos personales relacionados con direcciones, teléfono o correo electrónico.

Adicionalmente, le indicó que esa página web permite que los titulares de la información, después de validar su identificación, puedan consultarla en línea y de forma gratuita, y que, además, refleja todas las direcciones que fueron registradas ante los organismos de tránsito y si fueron modificadas desde esa aplicación. También le puso de presente que la información registrada en la página web sirve como certificación ante cualquier autoridad, y es esa la manera de obtener la información solicitada, ya que el titular de la información debe utilizar las herramientas estandarizadas que la entidad ha dispuesto para atender de manera segura las peticiones ciudadanas.

En este punto es menester recordar, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, que el derecho fundamental de petición se satisface con una respuesta oportuna, concreta, clara y congruente, lo que no equivale a sostener que la misma deba acceder favorablemente a lo solicitado, pues lo que se exige es que su contenido cumpla los requisitos mencionados, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo<sup>8</sup>.

Por lo tanto, el hecho de que la respuesta no colme el interés del peticionario no afecta el derecho fundamental de petición, pues su núcleo esencial no se contrae a que se otorgue una respuesta que acoja los pedimentos formulados, sino a que se otorgue una respuesta que resuelva de fondo el asunto solicitado. Si la respuesta no accede a las pretensiones, es un asunto ajeno a la acción de tutela que deberá resolverse a través de los mecanismos ordinarios.

En conclusión, se encuentra demostrado, de conformidad con las pruebas allegadas, que la **CONCESIÓN RUNT S.A.** no vulneró ni amenazó el derecho constitucional que la accionante

---

<sup>8</sup> Sentencia T-077 de 2018, T-487 de 2017, T-455 de 2014, entre otras.

invoca, pues otorgó una repuesta oportuna al derecho de petición, la cual fue notificada en debida forma. Por lo tanto, se negará el amparo del derecho fundamental invocado.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley:

### **RESUELVE**

**PRIMERO: NEGAR** el amparo del derecho fundamental de petición invocado por **REYLAURO S.A.S.** en contra de la **CONCESIÓN RUNT S.A.**, por las razones expuestas en esta providencia.

**SEGUNDO:** Notifíquese a las partes por el medio más eficaz y expedito, advirtiéndoles que cuentan con el término de tres (3) días hábiles para impugnar esta providencia, contados a partir del día siguiente de su notificación.

Por motivos de salud pública, y en acatamiento de las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura para evitar la propagación del coronavirus Covid-19, la impugnación deberá ser remitida al email: [j08lpbta@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j08lpbta@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**TERCERO:** En caso que la presente sentencia no sea impugnada, por Secretaría remítase el expediente a la Corte Constitucional para que surta el trámite eventual de revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

  
DIANA FERNANDA ERASSO FUERTES  
JUEZ